

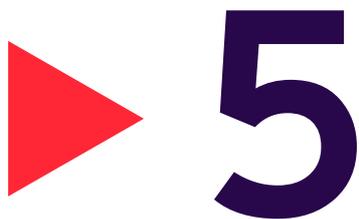


5

Opciones de política
y respuestas
a la crisis del costo
de la vida







Opciones de política y respuestas a la crisis del costo de la vida

El presente informe pone de relieve que las diversas crisis de los últimos tres años, de forma conjunta, han afectado al crecimiento salarial y a los resultados del mercado de trabajo asalariado en todo el mundo. Al tiempo que la OMS anuncia que se vislumbra el final de la pandemia de COVID-19¹, el creciente impacto de una grave crisis inflacionaria generalizada, junto con una desaceleración mundial del crecimiento económico, debida en parte a la guerra en Ucrania y a la crisis energética mundial, empuja el crecimiento del salario real a cifras negativas en la mayoría de los países y regiones. Esta es, de hecho, la primera vez que se registra un crecimiento salarial negativo a nivel mundial desde que la OIT comenzó a presentar las tendencias salariales por medio del *Informe Mundial sobre Salarios*, junto con una serie de datos que se remontan a 2006 y que abarcan, por lo tanto, las crisis económicas más importantes del siglo XXI hasta la fecha.

¹ El 14 de septiembre de 2022, cuando el Director General de la OMS anunció que se vislumbraba el final de la pandemia de COVID-19, describió la perspectiva más optimista hasta la fecha sobre esta crisis sanitaria, de dos años de duración, que ha acabado con la vida de casi 7 millones de personas en todo el mundo.

Antes de la pandemia, el lento crecimiento salarial era un motivo de preocupación en todos los países y regiones, lo que suscitó un intenso debate sobre los posibles mecanismos de estímulo al crecimiento salarial con el fin de sostener la demanda interna y reducir las desigualdades (FMI 2017; OIT 2019a; OCDE 2016). La crisis de la COVID-19 desató una reacción sin precedentes en todos los países del mundo, que trataron de apoyar a los trabajadores y de sostener los ingresos para evitar el colapso de los mercados laborales. Sin embargo, los distintos niveles de capacidad de las economías avanzadas, los mercados emergentes y los países en desarrollo para dar respuesta a la crisis han exacerbado la desigualdad de ingresos a nivel mundial, que ha alcanzado cotas inusitadas desde 2008-2010, invirtiendo así en parte el descenso logrado en los dos últimos decenios (Adarov 2022).

La pobreza también ha ido en aumento. Aunque la pobreza mundial ha reanudado recientemente su tendencia a la baja, entre 75 y 95 millones de personas quedaron sumidas en la pobreza extrema durante la crisis de la COVID-19 (Gerszon Mahler *et al.* 2022). Es probable que el crecimiento salarial negativo registrado en 2022, avivado por el rápido aumento de la inflación, acabe agravando la desigualdad interna de los países, no solo porque la inflación afecta más a los hogares con bajos ingresos (Bulíř 2001; Benson 2021; Orchard 2022), sino también porque los hogares vulnerables a la inflación han sido probablemente los más perjudicados por la pérdida

Las políticas necesarias para contener el aumento de la inflación inciden en los hogares de toda la escala de ingresos, por lo que es esencial apoyar a los trabajadores asalariados y a sus familias mediante garantías de salarios adecuados.

de empleo asalariado y de masa salarial en las fases más severas de la crisis. Es evidente que se necesitan políticas para frenar el aumento de la inflación, pero conviene tener en cuenta cómo inciden esas políticas en los hogares de toda la escala de ingresos. Hoy, más que nunca, se hace necesario apoyar a los trabajadores asalariados y a sus familias mediante garantías de salarios adecuados. En este último capítulo se ofrece un panorama general de las opciones de política y de las respuestas frente a la crisis del costo de la vida.

► 5.1. Políticas macroeconómicas

A partir del segundo trimestre de 2022, la respuesta de los bancos centrales y demás autoridades monetarias de todo el mundo a la presente crisis inflacionaria ha consistido, sobre todo, en subir los tipos de interés para evitar que la inflación alcance cotas aún más elevadas. El 15 de junio de 2022, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió sus tipos de interés de referencia 0,75 puntos porcentuales —la mayor subida desde 1994— como primer paso para alcanzar gradualmente una tasa de inflación del 2 por ciento en 2024. Del mismo modo, en el segundo trimestre de 2022, el Banco Central Europeo (BCE) anunció el levantamiento gradual de la política monetaria acomodaticia. Posteriormente, subió los tipos de interés 0,25 puntos porcentuales en julio de 2022 y otros 0,75 puntos porcentuales en septiembre de 2022, la mayor subida de la historia. Al igual que la Reserva Federal, el BCE también aspira a alcanzar una tasa de inflación del 2 por ciento en 2024.

Con la subida de los tipos de interés, previsiblemente aumentará el costo de la financiación (al igual que los beneficios del ahorro), caerán el consumo y la inversión, y la inflación dejará de crecer al desacelerarse la economía. Sin embargo, existe el riesgo de que la política monetaria restrictiva provoque

resultados adversos para determinados segmentos demográficos y, en consecuencia, desencadene un periodo de recesión. Los hogares, por ejemplo, pueden tener dificultades para saldar sus deudas, sobre todo las hipotecas, cuya contratación entraña el mayor riesgo de inversión para la mayoría de los hogares. Las medidas adoptadas por el BCE a lo largo 2022 ya han incrementado el costo de devolución de una hipoteca media en España en unos 120 euros al mes. Esta situación augura importantes dificultades financieras para los hogares de ingresos bajos en un país donde el salario mínimo bruto es de 1 167 euros mensuales. La elevación de los tipos de interés aumenta la cuantía de las cuotas hipotecarias y el costo del arrendamiento de una vivienda, lo que podría diferir la decisión de los trabajadores jóvenes de independizarse y de formar una familia, agravando aún más el envejecimiento de la población. Además, los hogares que se endeudaron durante la crisis de la COVID-19 para poder llegar a fin de mes se enfrentan ahora a la doble carga de reembolsar sus deudas a tipos de interés más altos, lo que rebajará aún más su nivel de vida. Aunque los bancos centrales son conscientes de esos riesgos, el escenario alternativo de presión inflacionaria continuada se considera aún más indeseable.

En el caso de las empresas, la subida de tipos de interés aumenta el costo de financiación, incluido el costo de las inversiones. Esta circunstancia puede frenar la creación de empleo asalariado en el sector privado y contribuir aún más a la desaceleración del crecimiento económico. La creación de empleo público también puede resentirse en periodos de política monetaria restrictiva. A pesar de que los tipos de interés elevados aumentan el atractivo de la deuda pública entre los inversores porque los bonos del Estado aportan mayores rendimientos con un riesgo que se considera bajo, la cuantía de los intereses de la deuda pública que soportan los gobiernos va en aumento y eso puede, en última instancia, sustraer recursos de la creación de empleo público. Por otro lado, el aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos, junto con la consiguiente apreciación del dólar, ha encarecido la amortización de la deuda de los países de ingresos bajos y medianos, lo que sitúa a sus economías en una posición más frágil en un momento en que sus mercados laborales todavía no se han recuperado plenamente de los efectos de la pandemia (Esteveño 2022).

Uno de los mecanismos por los que una política monetaria restrictiva puede frenar el aumento de la inflación es su incidencia en las expectativas inflacionarias y, por lo tanto, en la moderación de las demandas salariales para evitar una espiral de precios y salarios² (BCE 2022). Ello es así porque las expectativas de precios (o expectativas de inflación futura) son un elemento clave de las negociaciones salariales, incluida la negociación colectiva³. Ahora bien, ¿está justificado que un mecanismo de este tipo contribuya a reducir las tasas de inflación actuales? A partir de un exhaustivo análisis de datos empíricos, en el presente informe se ha demostrado que los salarios nominales no compensan los actuales efectos de la inflación y que el tibio crecimiento salarial, rezagado con respecto al crecimiento de la productividad, como ya se advirtió en el *Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019* (OIT 2019a), sigue siendo una característica persistente en muchos países. De hecho, no se ha constatado la existencia de una espiral de precios y salarios ni en los países de ingresos altos ni en los de ingresos bajos y medianos, la mayoría de los cuales no han recuperado todavía los niveles de empleo anteriores a la pandemia (FMI 2022d; Orchard 2022). Así las cosas, parece que buena parte del aumento de la inflación es resultado de las políticas expansivas de los últimos años combinadas con el reciente aumento de los precios de la energía, la obstrucción de las cadenas mundiales de suministro causada por la crisis de la COVID-19 y

los conflictos geopolíticos, en particular la guerra en Ucrania (OIT 2022c). Otra cuestión controvertida es la de si algunas grandes empresas pueden haber aprovechado la coyuntura inflacionista para subir sus precios y aumentar sus márgenes de beneficios (Zahn 2022). Los trabajadores asalariados, en particular los que se sitúan en los deciles inferiores de la distribución salarial, soportan la presión del aumento constante de los precios como consecuencia de una serie de perturbaciones exógenas que no parecen relacionadas con una espiral salarial. En tales circunstancias, el proceso de negociación de los futuros ajustes del salario nominal debería tener en cuenta una expectativa de precios suficientemente amplia pero prudente. Este planteamiento podría contribuir a salvaguardar el nivel de vida de los hogares, sobre todo los de ingresos bajos, frente a futuras subidas inesperadas de la inflación, evitando al mismo tiempo una indeseable espiral de precios y salarios. Además, en el informe se ha observado que la diferencia entre el crecimiento de los salarios y el crecimiento de la productividad laboral sigue ampliándose: de hecho, la diferencia en 2022 es la mayor registrada desde principios del siglo XXI. Eso significa que hay margen para que los salarios medios reales aumenten, no solo con el fin de contrarrestar el efecto de la inflación, sino también de alinearlos con el crecimiento de la productividad.

La diferencia entre el crecimiento de los salarios y el crecimiento de la productividad laboral sigue ampliándose: hay margen para que los salarios reales aumenten, no solo con el fin de contrarrestar el efecto de la inflación, sino también de alinearlos con el crecimiento de la productividad.

2 La curva de Phillips postula una relación negativa entre el desempleo y el crecimiento de los salarios, según la cual una menor tasa de desempleo da lugar a una mayor inflación de salarios y de precios.

3 La previsión de una tasa de inflación del 2 por ciento en 2024 debería afectar a los ajustes salariales previstos en los convenios colectivos que se negocian actualmente para los dos próximos años. Sin embargo, los bancos centrales y el FMI recientemente abogaron por aumentar los salarios, al entender que eran demasiado bajos para impulsar la inflación hasta el objetivo del 2 por ciento (Vieira 2016).

► 5.2. Necesidad de reforzar las instituciones del mercado de trabajo y las políticas salariales

En el informe se ha demostrado que las tasas de inflación también merman el poder adquisitivo del salario mínimo. Dado que 327 millones de asalariados antes de la pandemia, es decir, el 19 por ciento de todos los asalariados del mundo, percibían unos ingresos equivalentes o inferiores al salario mínimo por hora (OIT 2021e), un ajuste adecuado del salario mínimo ayudaría a mejorar significativamente el nivel de vida de los hogares con ingresos bajos en la presente crisis del costo de la vida. El hecho de que el 90 por ciento de los Estados Miembros de la OIT cuenten con sistemas de salario mínimo pone de relieve la importancia de este mecanismo como herramienta para reducir la pobreza de los trabajadores. El salario mínimo puede proteger a los trabajadores peor remunerados frente a la pérdida de poder adquisitivo en épocas de alta inflación. Sin embargo, para que el salario mínimo resulte eficaz, es necesario ajustarlo periódicamente teniendo en cuenta, además de los factores económicos, las necesidades de los trabajadores y de sus familias. Ese proceso de ajuste debe llevarse a cabo con la plena participación de los interlocutores sociales, de conformidad con el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). Un ajuste del salario mínimo contribuiría positivamente a mitigar la actual crisis del costo de la vida, además de ayudar a sostener la demanda agregada en un momento en que la economía mundial se desacelera como consecuencia de diversas crisis concurrentes (OIT 2016). Cabe destacar que el salario mínimo fue también un instrumento útil durante la crisis de la COVID-19 al servir de referencia en los planes de subsidios salariales de carácter temporal (OIT 2020a).

Un diálogo social sólido, que incluya procesos de negociación colectiva, puede ser decisivo para aplicar los debidos ajustes salariales en tiempos de crisis. A tal efecto, el requisito previo es una representación adecuada de las voces de los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, varios estudios han

señalado el gradual declive del poder sindical, en paralelo al aumento del poder de las grandes empresas, como un factor que explica el lento crecimiento de los salarios reales en los tres últimos decenios. El diálogo social, tanto bipartito como tripartito, fue un bastión fundamental de la respuesta inmediata a la crisis de la COVID-19 en muchos países y sectores, sobre todo al contribuir a diseñar y poner en práctica los planes nacionales de recuperación. Se concertaron esfuerzos dirigidos a reforzar la capacidad de las instituciones públicas y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para participar en el diálogo, con el fin de acordar una postura común sobre la manera de abordar los desafíos que la crisis planteaba (OIT 2021c). Lamentablemente, según un reciente informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la afiliación sindical en los países de la OCDE ha disminuido del 33 por ciento en 1975 al 16 por ciento en 2018, mientras que la proporción de trabajadores cubiertos por un convenio colectivo se redujo del 46 por ciento en 1985 al 32 por ciento en 2017 (OCDE 2019). En los Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de trabajadores cubiertos por convenios colectivos pasó del 27 por ciento en 1979 a solo el 11,6 por ciento en 2019 (Hirsch y Macpherson, s.f.).

La negociación colectiva y el diálogo social pueden beneficiarse del uso de datos empíricos sólidos que fundamenten las negociaciones bipartitas o tripartitas. El presente informe pone de relieve la importancia de utilizar datos pertinentes para examinar la incidencia de la crisis de la COVID-19 en la situación laboral de asalariados. En particular, el capítulo 4 trata de desentrañar los efectos de composición del empleo en los resultados salariales, lo que permite comprender con mayor exactitud cómo ha afectado la crisis a los empleados a lo largo de la distribución salarial. En este sentido, se observa que las pérdidas de empleo asalariado afectaron más a las

► El salario mínimo puede proteger a los trabajadores peor remunerados frente a la pérdida de poder adquisitivo en épocas de alta inflación. Sin embargo, para que el salario mínimo resulte eficaz, es necesario ajustarlo periódicamente teniendo en cuenta, además de los factores económicos, las necesidades de los trabajadores y de sus familias. El proceso de ajuste debe llevarse a cabo con la plena participación de los interlocutores sociales.

mujeres que a los hombres, que los asalariados de bajos ingresos perdieron más puestos de trabajo que los trabajadores mejor remunerados, y que los efectos adversos de la crisis perjudicaron más a los asalariados del sector informal que a quienes tenían empleos formales. Desde el punto de vista de la formulación de políticas, se necesitan datos empíricos sólidos y detallados que orienten a los interlocutores sociales y a las instituciones del mercado de trabajo. Durante la pandemia, las oficinas nacionales de estadística hicieron grandes esfuerzos por mantener la recogida periódica de datos de encuestas, pero en varios países la cobertura de los datos hasta finales de 2021 (y a veces hasta el primer semestre de 2022) no fue comparable a la de años anteriores. Las estadísticas salariales son las que presentan mayores lagunas (véase el anexo I, en particular las secciones sobre el tratamiento de datos). Por lo tanto, una recomendación pertinente para los responsables políticos es mejorar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística —sobre todo, aunque no exclusivamente, en los países de ingresos bajos y medianos— para recopilar información sobre el mercado laboral, incluso en tiempos de crisis.

Como se señala en el capítulo 3, la inflación de los precios al consumidor suele afectar más negativamente a los hogares de bajos ingresos, que dedican una mayor proporción de su renta a la adquisición de bienes inelásticos al precio, en particular alimentos, vivienda y transporte. En algunos países, el aumento del costo de la vida que soportan los hogares de bajos ingresos ya se tiene en cuenta al ajustar el salario mínimo. Por ejemplo, en el Brasil se aplica el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en lugar del índice general de precios, para ajustar el salario mínimo⁴. El INPC se calcula sobre la cesta de consumo de los hogares con ingresos equivalentes a entre uno y ocho salarios mínimos, mientras que el índice general de precios se basa en una cesta de consumo de hogares con ingresos de hasta 40 salarios mínimos y, por lo tanto, tiene en cuenta a casi todos los asalariados excepto a los de los deciles superiores. El INPC otorga un mayor factor de ponderación a los bienes consumidos por los hogares más pobres y, desde 2011, es el índice utilizado para ajustar el salario mínimo nacional junto con la variación del PIB del año anterior. Otro ejemplo de índice diferenciado es el Índice de Precios de Consumo para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W)⁵ de los Estados Unidos, que se sitúa ligeramente por encima del Índice de Precios de Consumo para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U)⁶, ya que el primero se basa en la situación de los trabajadores de ingresos bajos y medianos. En los Estados Unidos, el IPC-W

La creación de empleo asalariado formal decente no solo es un requisito previo para lograr una distribución más equitativa de los salarios y los ingresos, sino también un factor determinante del crecimiento salarial equitativo y sostenible.

se utiliza exclusivamente para ajustar las prestaciones de la seguridad social y la pensión de jubilación federal, y no los ingresos de los asalariados (ni siquiera los que perciben el salario mínimo). Ambos países (Brasil y Estados Unidos) aportan ejemplos de medidas que podrían servir para ajustar los salarios nominales de los hogares de ingresos bajos, de forma que los salarios reales se alineen con los patrones de gasto en el extremo inferior de la distribución de ingresos, especialmente cuando el panorama inflacionario es adverso y tiende a empeorar.

Conviene añadir que la creación de empleo asalariado formal decente no solo es un requisito previo para lograr una distribución más equitativa de los salarios y los ingresos, sino también un factor determinante del crecimiento salarial equitativo y sostenible. A finales de 2021, el empleo en los países de ingresos altos se había recuperado hasta alcanzar los niveles observados antes de la pandemia (a veces incluso superándolos) y, en algunos de esos países, aumentaron las ofertas de empleo (sobre todo en ocupaciones poco calificadas y semicalificadas), mientras que el número de demandantes de empleo se mantuvo estable (OIT 2022a). En las economías de ingresos bajos y medianos, el empleo todavía no ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia, mientras que el empleo informal parece ir en aumento, una secuela que podría perdurar una vez concluida la crisis de la COVID-19. La Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204) proporciona directrices que pueden ayudar a los países de ingresos bajos y medianos a mitigar esos efectos.

4 INPC son las siglas de *Índice Nacional de Preços ao Consumidor*. El Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) calcula una tercera cesta de bienes y servicios, denominada cesta del Salario Mínimo Necesario. Esta cesta ha resultado ser inasequible con el salario mínimo vigente, pero ayuda a los encargados de formular las políticas a comprender la inflación efectiva soportada por los hogares con ingresos equivalentes a un salario mínimo, una tasa que ha sido históricamente superior a la implícita en el INPC (Lemos 2004).

5 CPI-W son las siglas de Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers.

6 CPI-U son las siglas de Consumer Price Index for All Urban Consumers.

► 5.3. Políticas de apoyo a los hogares, en particular a los más vulnerables, en periodos de inflación elevada

Las políticas que alivian el impacto de la crisis inflacionaria en los hogares son diversas, desde medidas dirigidas a grupos específicos, como los vales que se conceden a los hogares de bajos ingresos para que puedan adquirir bienes esenciales, hasta intervenciones más generales destinadas a reducir el costo de la vida para todos los hogares, como la reducción (a menudo temporal) de los impuestos indirectos sobre bienes y servicios. Por ejemplo, muchos gobiernos, especialmente en los países de la eurozona, proporcionan a los hogares de bajos ingresos vales de energía para ayudarles a afrontar la actual crisis energética. En septiembre de 2022, el Gobierno alemán anunció un paquete de 200 000 millones de euros para mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía en empresas y hogares; la medida contempla una moderación de los precios del gas y una reducción del impuesto sobre las ventas de combustible. De manera análoga, ese mismo mes el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia anunció un paquete de 45 000 millones de euros para proteger a hogares y empresas de la crisis de los precios de la energía. También en Francia, los hogares con ingresos anuales inferiores a 10 800 euros pueden beneficiarse, desde 2018, de vales de energía de entre 48 y 277 euros al mes.

Algunos países (o bloques de países) han introducido impuestos de carácter temporal o permanente que gravan a las empresas petroleras y gasísticas, las grandes empresas o los hogares más ricos, con el fin de sufragar el costo de las medidas adoptadas en tiempos de crisis. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la UE propuso la aplicación de un impuesto extraordinario a los productores de combustibles fósiles para compensar los efectos de la crisis energética. En esa misma línea, España anunció una batería de medidas (unas temporales, otras permanentes) destinadas a aumentar los ingresos del Gobierno para hacer frente a la crisis actual, evitando perjudicar a los hogares vulnerables. Entre ellas cabe destacar un impuesto (temporal) del 1,7 por ciento sobre el patrimonio de las grandes fortunas (es decir, los hogares con un patrimonio igual o superior a 3 millones de euros), un aumento de hasta 2 puntos porcentuales en el tramo superior del impuesto sobre la renta, un impuesto temporal aplicado tanto a las grandes empresas energéticas como al sector bancario y, al mismo tiempo, una reducción del impuesto sobre la renta en beneficio de los hogares de bajos ingresos junto con una reducción de la carga fiscal de las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos. El Reino Unido impulsó en mayo de 2022 una tasa del 25 por ciento sobre los beneficios de las grandes empresas petroleras y gasísticas que operan en su territorio, con la que espera recaudar más de 28 000 millones de libras en los próximos años. En octubre de 2021, la OCDE acordó introducir una reforma histórica del sistema fiscal internacional,

que garantizará que las empresas multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15 por ciento a partir de 2023. El acuerdo abarca 136 países y jurisdicciones que representan más del 90 por ciento del PIB mundial y, de aplicarse, podría redistribuir a países de todo el mundo más de 125 000 millones de dólares de beneficios de un centenar de las empresas multinacionales más grandes y rentables del mundo (OCDE 2021). La adopción de este tipo de medidas podría ayudar a los gobiernos a recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las crisis actuales. Suponiendo que los productores de energía no repercutan sus costos adicionales en los consumidores, esas políticas podrían mitigar de manera efectiva la crisis del costo de la vida de los hogares con ingresos bajos, sin que ello repercuta negativamente en la inflación o los precios.

►► Los recortes del IVA pueden mitigar la carga inflacionaria de los hogares de bajos ingresos y contribuir al control de la inflación.

Los recortes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) pueden mitigar la carga inflacionaria de los hogares de bajos ingresos y contribuir al control de la inflación. En Alemania, por ejemplo, el IVA se redujo durante un periodo de seis meses, del 1.º de julio al 31 de diciembre de 2020, como parte del paquete de estímulo contra la crisis de la COVID-19 para fomentar la demanda agregada. Además de reducir considerablemente el costo de los bienes y servicios básicos (por ejemplo, el tipo anterior del IVA del 7 por ciento sobre los alimentos se redujo al 5 por ciento), se calcula que esa

►► A medida que la actual crisis del costo de la vida empieza a amenazar la supervivencia económica de los hogares, varios países recortan los tipos del IVA sobre la energía.

política impulsó el PIB alemán en un 0,3 por ciento (Funke y Terasa 2022). A medida que la actual crisis del costo de la vida empieza a amenazar la supervivencia económica de los hogares, varios países recortan los tipos del IVA sobre la energía. Por ejemplo, España ha reducido el IVA de la electricidad del 21 al 5 por ciento a partir de junio de 2022, mientras que el IVA del gas en Alemania se ha reducido del 19 al 7 por ciento a partir de agosto de 2022. La reducción

del IVA de bienes y servicios esenciales tiene dos ventajas. Como se explica en el capítulo 4, esas son las partidas a las que destinan la mayor parte de su renta los hogares de ingresos bajos, de modo que esos hogares podrán sobrellevar mejor la crisis si se reducen los costos correspondientes. Al mismo tiempo, la reducción del IVA contribuye a bajar el nivel general de precios, que es otro de los objetivos de la política monetaria restrictiva.

► 5.4. Corrección de la brecha salarial de género

Las estimaciones expuestas en el *Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019*, que se basaron en datos de 2014-2016, indicaban una brecha salarial mundial entre hombres y mujeres de aproximadamente el 20 por ciento (OIT 2019a). Sobre la base de una muestra más reducida de países, en la presente edición se concluye que la brecha salarial de género ha cambiado poco en los últimos años, a pesar de los esfuerzos realizados por varios países de todas las regiones del mundo para reducir la discriminación salarial y alcanzar el objetivo de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Eso da una idea de la complejidad del problema.

Queda mucho por hacer para seguir reduciendo las desigualdades salariales entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Entre otras cosas, es necesario subsanar la parte de la brecha salarial de género que puede explicarse por los atributos de las mujeres en el mercado de trabajo, con medidas tales como la mejora de la situación educativa de las mujeres y la lucha por una distribución más equitativa de mujeres y hombres en los distintos sectores y ocupaciones. Conviene abordar asimismo otros factores inherentes a la brecha salarial de género, en particular mediante la reducción de las diferencias salariales asociadas a la maternidad, el aumento de los salarios en los sectores y ramas de actividad feminizados e infravalorados, y la aplicación de marcos jurídicos y políticas que fomenten la transparencia salarial en las empresas con miras a erradicar la discriminación. La Coalición Internacional por la Igualdad Salarial, iniciativa impulsada

conjuntamente por la OIT, ONU-Mujeres y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos desde septiembre de 2017, colabora con los gobiernos, interlocutores sociales y un número considerable de empresas del sector privado como parte de su mandato de lograr la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor⁷. Esta y otras iniciativas similares permiten a todos los países no solo conocer fructíferas experiencias de medición y control de las diferencias salariales a nivel nacional, sino también familiarizarse con las herramientas que se aplican en algunas economías importantes y entender cuáles son más eficaces para reducir la discriminación salarial de género.

Al abordar las desigualdades de género en el mundo del trabajo, es importante tener en cuenta una posible consecuencia de la crisis de la COVID-19, a saber, una mayor brecha de género en el empleo, en particular en los países de ingresos bajos y medianos (OIT 2022a). Cuando las mujeres renuncian a la vida activa, tienen menos probabilidades que los hombres de reanudarla pasado un tiempo; además, las mujeres tienen más dificultades que los hombres de encontrar empleo (OIT 2017). El aumento de las diferencias de género en el empleo también puede debilitar el poder de negociación de las mujeres en el mercado laboral, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, donde predominan los empleos mal remunerados. Si esa tendencia persiste, sin duda contribuirá a mantener la brecha salarial de género, o incluso a acrecentarla, perpetuándola como uno de los efectos de la crisis de la COVID-19 a largo plazo.

⁷ Véase <https://www.equalpayinternationalcoalition.org/>.

► 5.5. La importancia del multilateralismo

Los precios ya estaban en alza antes del estallido de la guerra en Ucrania, pero es incuestionable que el conflicto ha contribuido a elevar las tasas de inflación, sobre todo en los países más dependientes del suministro de petróleo y gas de la Federación de Rusia. Si la guerra se prolongara, podría frustrar los resultados esperados en materia de productividad y arrastrar a las grandes economías, especialmente las de la zona euro, a una recesión. En tales circunstancias, a pesar de la necesidad de canalizar el gasto público hacia medidas de apoyo a los hogares de bajos ingresos, también es importante considerar la inversión pública en la promoción de fuentes de energía que sean una alternativa viable a los combustibles fósiles. Esta línea de actuación no solo podría promover el empleo asalariado en nuevos sectores, sino que contribuiría ante todo a aumentar la estabilidad mundial, al reducir la dependencia de fuentes de energía geopolíticamente sensibles, y facilitaría una transición justa hacia una economía capaz de promover la utilización eficiente de los recursos.

La reciente crisis sanitaria y la guerra en Ucrania parecen ser los principales factores de incertidumbre en la actualidad. No obstante, el mundo lleva ya dos decenios derivando en una dirección que pone en peligro las perspectivas de alcanzar la prosperidad y la paz para todos, uno de los objetivos que propugna la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tratan de construir un mundo sin pobreza extrema y con igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan desarrollar su potencial. La financiación mundial y

la movilización de recursos son fundamentales para cumplir esos objetivos y, aunque la comunidad internacional ha prestado hasta ahora un apoyo considerable, es necesario hacer más.

Entre los diversos factores que se ciernen sobre la humanidad y amenazan su existencia misma al generar o agravar conflictos económicos, sociales y políticos, cabe destacar los siguientes: los efectos negativos del cambio climático; el aumento de las desigualdades; la pobreza, la discriminación, la violencia y la exclusión que sufren millones de personas, incluida la discriminación que siguen padeciendo las mujeres y las niñas en muchas partes del mundo; la falta de vacunas y de acceso a un saneamiento adecuado y a una atención sanitaria esencial para todos, y la creciente brecha digital entre los países pobres y los más ricos.

En consecuencia, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó en 2021 una agenda de propuestas clave, agrupadas en 12 compromisos, que en conjunto tratan de reafirmar la solidaridad mundial como forma de superación de las crisis. Una de las propuestas clave que se recogen en *Nuestra Agenda Común*, como se titula el documento, es la de reforzar el trabajo decente (Naciones Unidas 2021). Algunas medidas pertinentes para la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la creación de empleo con un salario decente y políticas que garanticen unas condiciones salariales adecuadas, pueden ser una vital contribución al logro de la justicia social.